



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 02 AGO 2020

Auto Interlocutorio No. 101

**MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVAEZ DAZA**

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LESIVIDAD
EXPEDIENTE:	76001-23-33-009-2017-01460-00
DEMANDANTE:	COLPENSIONES
DEMANDADO:	ROSA ELENA TAMAYO HERNANDEZ
ASUNTO	REMITE POR COMPETENCIA

La entidad demandante a través de apoderado judicial, mediante el ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, demandó a la señora Rosa Elena Tamayo Hernández y pretende<sup>1</sup> la nulidad del siguiente acto administrativo:

- Resolución GNR 268457 del 25 de julio de 2014, mediante la cual se reconoció la pensión de vejez a la señora Tamayo Hernández, en cuantía al año 2014 de \$2.253.036, con un IBL de \$ 3.004.048, correspondiente a una tasa de reemplazo del 75% con 1932 semanas cotizadas, de conformidad con la Ley 33 de 1985.

A título de restablecimiento del derecho, solicita se ordene a la demandada, la devolución de lo pagado por el reconocimiento de la pensión de vejez a partir de la fecha de inclusión de nómina de pensionados hasta que se ordene la suspensión o se declare la nulidad del acto demandado. Así mismo, se ordene el reintegro de los valores girados por concepto de salud en favor de la demandada dentro del mismo término señalado, sumas que deberán ser indexadas o reconocidos los intereses a que haya lugar-

Mediante auto de sustanciación nro. 356 del 21 de agosto de 2019<sup>2</sup>, este Despacho inadmitió la demanda para que la parte actora dentro del término establecido, realizara la estimación razonada la cuantía de conformidad con lo

<sup>1</sup> Ver folio 9 reverso

<sup>2</sup> Ver folios 19-20



estipulado en el inciso final del artículo 157 de la Ley 1437, soportando de donde viene dicho valor, so pena de rechazo.

Vencido el término, la parte demandante guardó silencio, lo que en principio conllevaría al rechazo de la demanda, sin embargo, en virtud de las facultades de saneamiento se procederá nuevamente a su estudio, atendiendo a que se evidencian elementos de juicio o valorativos que permiten establecer el monto de la cuantía.

Respecto a la estimación de la cuantía, el Consejo de Estado<sup>3</sup> ha recordado que la fijación de los perjuicios causados tiene como finalidad determinar quién es el juez competente para conocer de un determinado proceso. Sobre el particular, ha expresado que:

*"Cuando en la demanda se formulen varias pretensiones, la cuantía del proceso se determinará por el monto de la pretensión mayor formulada por cada uno de los demandantes. Así, se tiene que los perjuicios por daño moral, daño emergente y lucro cesante son pretensiones autónomas entre sí y respecto de cada demandante, por lo tanto no se pueden sumar para efectos de determinar la cuantía de las pretensiones formuladas por cada uno de ellos"<sup>4</sup>. (Subrayas por fuera de texto).*

Al momento de estudiar la competencia funcional se debe analizar de manera individual cada una de las pretensiones y así determinar si es dable admitir o no la demanda.

El numeral 6 del artículo 155 del CPACA establece lo siguiente:

**"Art. 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia.** Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

**2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controvertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes".**

Ahora bien, el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011 establece:

**"ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA.** Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A, C.P. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, providencia 19 de febrero de 2019, Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00197-00(62962).

<sup>4</sup> Consejo de Estado, auto de 28 de marzo de 2007, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En igual sentido se ha pronunciado el Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E) en auto de 2 de mayo de 2016.



por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

(...)

**La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios,** que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.” (Subraya y negrilla fuera de texto).

Es preciso aclarar que, el artículo 157 del CPACA cuando refiere que no se pueden tener en cuenta los perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda, debe entenderse como aquellos valores que aún no se han causado y que el actor pretende le sean reconocidos como consecuencia necesaria y directa del no pago oportuno de sumas reclamadas como principales<sup>5</sup>.

En el presente asunto, la parte demandante pretende la nulidad de la Resolución GNR 268457 del 25 de julio de 2014 que le otorgó la pensión de vejez a la señora Tamayo Hernández por valor de \$2.253.036. Posteriormente, la entidad demandante mediante Resolución nro. GNR 106012 del 13 de abril de 2015 le indicó a la demandada que la mesada pensional correcta equivale a \$2.027.327 para el 2014, en lugar de la inicialmente reconocida y solicita la autorización expresa para la revocatoria de la primera.

Es precisamente sobre las diferencias entre el valor reconocido y el valor real de la pensión contenidas en las resoluciones mentadas que debe realizarse la estimación de la cuantía, arrojando una diferencia de \$225.709, que calculada de conformidad con el inciso final del artículo 157 del CPACA (los últimos tres años), arroja un valor de \$8.125.524<sup>6</sup> pesos, cifra que resulta inferior a los 50 SMLMV<sup>7</sup>, por lo que debe darse aplicación al numeral 2 del artículo 155 del CPACA y la competencia para conocer en primera instancia el presente asunto radica en los juzgados administrativos.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 168<sup>8</sup> del CPACA se ordenará remitir el expediente por competencia al Juez Administrativo del Circuito de Cali

<sup>5</sup> Consejo de Estado – Sección Tercera, C.P. MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, radicación 50001233100020120019601 (48152)

<sup>6</sup> \$ 225.709 (diferencia de la mesada) x 36 meses = 8.125.524 (sin mesada adicional y sin indexar)

<sup>7</sup> Salario mínimo año 2017 = 737.717 x 50 = 36.885.850 pesos

<sup>8</sup> ARTÍCULO 168. FALTA DE JURISDICCIÓN O DE COMPETENCIA. En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de

REPARTO, quien deberá observar el inciso tercero del artículo 139<sup>9</sup> del CGP aplicable por remisión expresa del artículo 306<sup>10</sup> del CPACA.

En consecuencia; se,

**RESUELVE:**

**PRIMERO.- DECLARAR LA FALTA DE COMPETENCIA** en razón de la cuantía para tramitar el presente proceso, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

**SEGUNDO.- REMITIR** por competencia en razón a la cuantía el presente medio de control a los Juzgados Administrativos del Circuito de Cali (REPARTO), quien deberá atender lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 139 del Código General del Proceso.

**TERCERO.-** Por Secretaría de esta Corporación realizar las anotaciones pertinentes en el sistema Justicia Siglo XXI.

2017-01460-00

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

**OSCAR SILVIO NARVAEZ DAZA**  
Magistrado

que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión

<sup>9</sup> ARTÍCULO 139. TRÁMITE. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso.

El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.

El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.

El juez o tribunal al que corresponda, resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.

Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.

La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces. (subrayas fuera de texto).

<sup>10</sup> ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

VoBo Secretario  
Nathaligg